

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL



JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá, D. C., quince (15) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

EXPEDIENTE:	11001 33 35 029 2023-00235-00
DEMANDANTE:	RUBEN DARÍO TORO CAÑÓN
DEMANDADO:	NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL
CONTROVERSIA:	EJECUTIVO LABORAL

El señor Rubén Darío Toro cañón, a través de apoderado judicial, presenta memorial de demanda ejecutiva solicitando se libre mandamiento de pago en su favor y en contra de la Nación- Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de obtener el pago resultante del cumplimiento del fallo proferido el 17 de marzo de 2019, proferido por este Despacho Judicial.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

En este momento procesal correspondería librar mandamiento de pago en contra de la entidad ejecutada; sin embargo, debido a unas falencias que se observan, se procederá a precisarlas y otorgar plazo para su corrección.

Ahora bien, cabe destacar que en el asunto sub examine, por tratarse de un proceso ejecutivo, en principio no sería factible inadmitir la demanda, sin embargo, en aras de garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia y la primacía del derecho sustancial sobre el formal, cuando se observen falencias de requisitos formales en la demanda ejecutiva es procedente que ésta sea inadmitida para que se efectúen las correcciones pertinentes y así continuar con el normal curso del proceso. Sobre lo aquí expuesto el Consejo de Estado sostuvo lo siguiente:

*“Así las cosas, en los procesos ejecutivos el juez no puede inadmitir la demanda y ordenar al ejecutante corregirla, por ejemplo, aportando los documentos necesarios para configurar el título ejecutivo. No obstante, lo anterior, la Sala considera pertinente reiterar que, en el proceso ejecutivo, **si bien no es posible inadmitir la***

demanda para que el ejecutante complete el título presentado, sí lo es para que se corrijan los requisitos formales establecidos en el art. 85 del C.P.C. En el proceso ejecutivo nada se prevé sobre este trámite, razón por la cual es necesario remitirse a las disposiciones generales del estatuto procesal civil. En providencia del 16 de junio de 2005, esta Sala acogió la tesis doctrinal según la cual es posible corregir los defectos formales de la demanda pues, lo contrario, implica una rigidez que carece de sustento legal y que se encontraría en contravía del principio constitucional de primacía de la sustancia sobre la forma. De igual manera, implicaría una vulneración del derecho de acceso a la Administración de Justicia, pues, con argumentos meramente formales, se impediría la puesta en marcha del aparato judicial. ***Lo anterior no obsta para que la Sala reitere su posición según la cual no puede el juez de la demanda ejecutiva, en cualquier caso, inadmitirla con el propósito de permitir al demandante completar, adicionar o mejorar o, en general, variar el título ejecutivo presentado ab initio de modo insuficiente.*** En este caso, el Tribunal inadmitió la demanda para que, en su criterio, se subsanara el título ejecutivo, conducta que, como se anotó, no resulta procedente en juicios ejecutivos, decisión que, de todas maneras, se respetará puesto que la irregularidad anotada no configura causal de nulidad, de aquellas que puedan decretarse de oficio o en el trámite de la segunda instancia”¹. (Negrilla fuera de texto).

Teniendo en cuenta lo expuesto, la citada jurisprudencia otorga al Juez de conocimiento la posibilidad de conceder un plazo para corregir la demanda ejecutiva por razones puramente formales.

Conforme a lo anterior, se procederá a analizar la demanda ejecutiva presentada:

Mediante sentencia proferida en audiencia inicial del 17 de marzo de 2019, el Juzgado 29 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 2017-033, condenó a la Nación- Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional a reajustar la asignación básica mensual del señor Rubén Darío Toro Cañón – en la suma equivalente de un salario mínimo legal incrementado en un 60% - para el periodo comprendido entre el mes de noviembre de 2003 a la fecha del retiro definitivo del servicio activo y que para estos mismos años, la reliquidación de las Cesantías, intereses a las cesantías, las primas anual, de Vacaciones y de Navidad, asimismo, ordenó pagar al señor Toro Cañón, el pago de las diferencias en dinero que resulten de dicho reajuste de la asignación básica mensual y de la reliquidación de las prestaciones sociales citadas – causadas a partir del 09 de septiembre de 2012 por prescripción cuatrienal y ordenó a la entidad demandada a efectuar de manera indexada los descuentos en la proporción correspondiente por concepto de aportes a la

¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ, Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil seis (2006), Radicación número: 15001-23-31-000-2001-00993- 01(30566), Actor: CONSTRUCA S.A., Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

seguridad social integral y demás a que haya lugar – sobre el reajuste salarial y prestacional del 20% ordenado en la sentencia. .

El día 22 de junio de 2023, la parte demandante presentó memorial en dos (2) folios “PROCESO EJECUTIVO” en la que solicita se sirva ordenar librar mandamiento de pago en contra del demandado, sin que indique un valor sobre el cual pretende que se libre mandamiento de pago y bajo que concepto (**capital, indexación e intereses**), además, no aporta copia de la sentencia con su respectiva constancia de ejecutoria.

De otra parte, por secretaría del Juzgado **proceder a costa de la parte actora** a expedir copia de la sentencia proferida por este Despacho el 17 de marzo de 2019, con su respectiva constancia de ejecutoria (en caso de no haber sido expedida), con el fin de que la parte actora obtenga copia de la misma, como quiera que manifiesta que el demandante perdió todos los documentos, tanto el radicado de cuenta como la sentencia; se advierte al secretario que debe cumplir con las reglas establecidas en el artículo 114 del C.G.P., según el caso.

Conforme a lo expuesto, la parte demandante deberá corregir lo siguiente:

1. Determinar las pretensiones de la demanda, indicando el valor por el cual considera que se debe librar mandamiento de pago y si es por concepto de capital, indexación o intereses, teniendo en cuenta lo ordenado mediante sentencia del 17 de marzo de 2019, junto con las respectivas certificaciones laborales.
2. Allegar una liquidación sobre los valores que considera que la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional le adeuda a la demandante e indicar las sumas canceladas por dicha entidad, allegando copia del acto administrativo y/o resolución, haber lugar a ello.
3. Deberá allegar poder que lo faculta para representar a la parte ejecutante, comoquiera que no fue aportado.

4. Solicitud de cumplimiento de sentencia del 17 de marzo de 2017.
5. Así mismo, se insta al apoderado de la parte actora para que allegue constancia de envío del **traslado de la demanda, sus anexos y del escrito de subsanación** al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional de conformidad con lo establecido en el artículo 162 – adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021.

Para tal efecto, deberá en la liquidación indicar y acreditar con documentación laboral relacionada con el salario mensual y las prestaciones sociales devengadas por el señor Rubén Darío Toro Cañón, para los años cuyo reajuste fue ordenado en la sentencia ordinaria (2017-033), es decir, la asignación básica mensual y las prestaciones sociales devengadas a partir de noviembre de 2003 hasta la fecha de retiro del servicio activo, con el fin de observar una liquidación clara y precisa, de las sumas de dinero adeudadas al demandante,

Así mismo, **en caso de solicitar intereses moratorios**, deberá **ACLARAR** que intereses exige y desde que fecha, teniendo en cuenta que, para reclamar el pago de intereses moratorios, debió dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria, haber acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva. De lo contrario, solo podrá reclamar intereses desde la fecha en que presentó la solicitud en legal forma de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

En el mismo sentido, se pondrá de presente la posición que ha sido planteada por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que al respecto conceptuó² :

A. La indexación y los intereses moratorios concomitantes El fundamento legal de la indexación, según el Consejo de Estado, reside en artículo 178 de Código de lo Contencioso Administrativo, que a la letra dispone:

² 2 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Consejero ponente: LUIS FERNANDO ALVAREZ JARAMILLO, Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil doce (2012), Radicación número: 11001-03-06-000-2012-00048- 00(2106), Actor: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, Referencia: Criterios para cumplir las sentencias laborales dictadas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo que ordenan el reintegro y pago de emolumentos.

“ARTICULO 178. AJUSTE DE VALOR. La liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencias de la jurisdicción en lo contencioso administrativo deberá efectuarse en todos los casos, mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y cualquier ajuste de dichas condenas sólo podrá determinarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor”

En este punto, la Corporación ha venido señalando que el ajuste de las sentencias condenatorias obedece al hecho notorio de la constante y permanente devaluación de la moneda, que en tratándose de servidores del Estado, disminuye en forma continua el poder adquisitivo de sus ingresos, por lo que la indexación es un acto de equidad, cuya aplicación se sustenta además en el artículo 230 de la Constitución Política, que dispone:

“ARTICULO 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.”

Es así que cuando se ordena el restablecimiento del derecho con la indexación, se busca que dicho restablecimiento “represente el valor real al momento de la condena que es el equivalente al perjuicio recibido.”

Se precisa además que la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación ha manifestado que “en razón a que tanto la indexación como el reconocimiento de intereses moratorios obedecen a la misma causa, cual es la devaluación del dinero, son incompatibles”, por lo tanto, si se ordena el reconocimiento de intereses por mora concomitantemente con la indexación, se estaría condenando a la entidad a un doble pago por la misma causa.

En tal medida, cuando en la condena judicial de reintegro, se ordena la actualización de las sumas liquidadas a favor del accionante, desde la fecha en que se causaron a la fecha de su pago efectivo, no puede condenarse simultáneamente, a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia, al pago de los intereses de mora previstos en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, pues resultan incompatibles”.

Por estos motivos, el Despacho en aras de garantizar a la parte ejecutante su derecho de acceso a la administración de justicia y teniendo en cuenta las falencias anotadas, se requerirá a la parte actora para que las corrija, o realice las aclaraciones que sean del caso.

En consecuencia, una vez expuesto los defectos de los que adolece la demanda, la parte demandante, dentro del término legal de **diez (10) días hábiles**, deberá subsanar las irregularidades antes descritas, so pena de que el despacho tome las medidas que en derecho corresponda.

Por lo anteriormente expuesto el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: CONCEDER a la parte ejecutante, el término de diez (10) días para que se corrija los defectos anotados, so pena de que se tomen las medidas que en derecho corresponda.

SEGUNDO: Vencido el término anteriormente indicado, reingrese el expediente al Despacho para continuar con lo procedente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ENRIQUE ARCOS ALVEAR
JUEZ

RYGH

JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA

Por anotación en ESTADO notifico a las partes la providencia anterior

Hoy 16 de agosto de 2023 a las 8:00 a.m.

PARTES	CORREO ELECTRÓNICO
PARTE DEMANDANTE:	notificaciones@wyplawyers.com
PARTE DEMANDADA:	notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co
MINISTERIO PÚBLICO: PROCURADOR 191	Procjudadm191@procuraduria.gov.co

JUDICIAL PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
---------------------------------------	--